Laboral

El fondo de pensiones de promoción pública: la inserción de la previsión privada en el ámbito público

Aunque ampliamente anunciada, resulta novedosa la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Regulado como un fondo de pensiones de empleo y, por tanto, previsto sólo para albergar los planes de pensiones del sistema de empleo, este nuevo instrumento estará promovido y controlado con una fiscalización pública clara, sin perjuicio de que la gestión de los planes pueda seguir siendo privada.

LOURDES LÓPEZ CUMBRE

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

1. La Ley 12/2022, de 30 de junio (BOE de 1 de julio), de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, introduce nuevos instrumentos en la previsión privada. Tan sólo un artículo para modificar de forma sustancial la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (en adelante, también, LPFP y Ley de Planes y Fondos de Pensiones) mediante la introducción en el ámbito público de la previsión privada.

No es el momento de analizar el importante alcance de esta reforma ni conviene anticipar

resultados, toda vez que dependerá de la aceptación que este nuevo planteamiento previsional tenga entre sus destinatarios. Baste, en esta primera entrega, con una aproximación a uno de los elementos más novedosos de esta iniciativa: la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.

2. Un nuevo capítulo XI (arts. 52 y ss. LPFP) regula este instrumento, desconocido hasta hoy en el sistema de previsión español. Estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos (FPEPP), promovidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (el «Ministerio») por medio

de una Comisión Promotora y de Seguimiento creada a tal efecto, se enmarcan dentro de la categoría de los fondos de pensiones de empleo, de ahí que limiten su ámbito de actuación exclusivamente al desarrollo de planes de pensiones del sistema de empleo y que, en lo no previsto en esta nueva normativa, se considere de aplicación el régimen jurídico de aquéllos.

Recordemos que, en atención a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, todo fondo de pensiones requiere una autorización administrativa para actuar. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dispone de un Registro Administrativo de Fondos de Pensiones y de un Registro Administrativo de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones. Los fondos de pensiones podrán ser de empleo o personales, quedando reservados los primeros para aquellos cuyo ámbito de actuación se limite al desarrollo de planes de pensiones del sistema de empleo exclusivamente. En fin, respecto de los procesos de inversión, los fondos podrán ser cerrados o abiertos, caracterizando a estos últimos la canalización de las inversiones de otros fondos de pensiones y de planes de pensiones adscritos a otros fondos.

Pues bien, en principio, el tipo de planes de pensiones que pueden integrarse en estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos son dos, a saber, por una parte, los planes de pensiones de empleo simplificados que desarrolla esta misma Ley 12/2022 y, por otra, los planes de pensiones de empleo de aportación definida para la contingencia de jubilación. Eso no impedirá que puedan ofrecer prestaciones definidas para el resto de las contingencias, siempre y cuando éstas se encuentren totalmente aseguradas. *Ad cautelam*, el legislador

establece expresamente que la promoción de estos fondos no supondrá, en ningún caso, una garantía sobre la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas al plan de pensiones ni de la rentabilidad asignada a dichas aportaciones y contribuciones.

3. Como entidad promotora de estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos actuará la Comisión Promotora y, como se ha indicado con carácter general, dichos fondos deberán inscribirse en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización administrativa previa y procederá, con posterioridad, su inscripción en el Registro Administrativo Especial de Fondos de Pensiones.

La Comisión Promotora y de Seguimiento estará adscrita al Ministerio y estará integrada por nueve miembros, todos ellos funcionarios de carrera pertenecientes a distintos ministerios, siendo cinco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con un cargo no remunerado. Entre sus principales funciones se encuentra no sólo la representación, sino la selección de entidades gestoras y depositarias; la aprobación de un marco común de estrategia de inversión que tendrá un carácter estable a largo plazo y que deberá revisar, al menos cada cinco años, el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial; la supervisión sobre el adecuado funcionamiento y el buen gobierno de estos fondos y de su política de inversiones, y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.

4. La gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos será desarrollada por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y

bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos ellos. A tal efecto, podrán actuar como entidades gestoras aquellas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones —entre otros, tener un capital mínimo desembolsado de seiscientos mil euros, que sus acciones sean nominativas, tener como objeto social y actividad exclusivos la administración de fondos de pensiones, estar domiciliadas en España o, en fin y entre otras, inscribirse en el Registro administrativo antes indicado—. En todo caso, deberán utilizar la plataforma digital común regulada en el artículo 57.2 de la ley mencionada y se obligan a alcanzar un patrimonio mínimo.

Su selección se regirá por lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a través de un procedimiento abierto, respetando los principios de igualdad, transparencia y libre competencia y de acuerdo con los requisitos exigidos expresamente en el artículo 63 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones —entre otros, el de estar autorizada como entidad gestora de fondos de pensiones y no hallarse incurso en causa de exclusión y detallar una propuesta de política de inversión para cada tipo de fondo—. Los contratos merecerán la consideración de contratos privados, ex artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público. Con una periodicidad máxima de tres años, el Ministerio convocará un procedimiento abierto para seleccionar a las entidades gestoras de los nuevos fondos.

En idéntica línea, podrán ser entidades depositarias aquellas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones —entre otros, ser entidad de crédito; tener en España domicilio social o una sucursal; tener como

actividad autorizada la recepción de fondos del público en forma de depósito, cuentas corrientes y otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución y, como depositarios de valores negociables y otros activos financieros, la custodia y administración por cuenta de sus titulares; y estar inscrita en el Registro Especial de Entidades Depositarias de Fondos de Pensiones— y los específicos del artículo 64 de la misma ley con un proceso de selección y unas reglas de contratación similares a las de las entidades gestoras. En todo caso, la sustitución de las entidades gestora o depositaria será posible mediante la resolución del contrato, salvo en los supuestos recogidos en el artículo 214.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Como señala el artículo 64 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, estas entidades depositarias percibirán como retribución total por el desarrollo de sus funciones una comisión de depósito dentro del límite fijado en las normas de funcionamiento del fondo de pensiones.

Pues bien, para garantizar la interoperabilidad entre las entidades gestoras y las depositarias, la normalización y calidad de los procesos, la agilidad de las operaciones, la monitorización y supervisión, y los procesos de información de estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, se utilizará precisamente una plataforma digital común para todas las entidades gestoras y depositarias. La plataforma dará servicio a promotores de planes de pensiones de empleo, partícipes y beneficiarios en sus operaciones básicas. Asimismo, dará acceso a la Comisión de Control Especial de dichos fondos, a la Comisión Promotora y de Seguimiento, así como a las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y al resto de las partes interesadas. Esta plataforma digital común permitirá la

trazabilidad del histórico de los movimientos económicos de las personas partícipes y de los promotores independientemente de los traslados de plan que se hayan registrado y cumplirá la normativa vigente en materia de protección de datos.

5. Todo fondo estará supervisado por una Comisión de Control Especial, constituida de forma única para todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos. Estará compuesta por trece miembros nombrados por la Comisión Promotora y de Seguimiento. De ellos, cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas y cinco por el Ministerio. Se respetará una composición equilibrada de género y se garantizará una representación mínima del cuarenta por ciento en cualquiera de ellos. La duración del mandato será, como máximo, de seis años y los miembros deberán poseer al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos o planes de pensiones o en otras actividades relacionadas.

En el desempeño de su función, los miembros de la Comisión de Control Especial actuarán con plena independencia en defensa de los intereses de las personas partícipes y beneficiarias. Una vez nombrados, elegirán entre sí a quienes hayan de ejercer la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría. Al menos la mitad de estos cargos deberán ser ocupados por mujeres. La Comisión habrá de reunirse mensual, trimestral o anualmente, según la naturaleza de los asuntos que se hayan de tratar. Sus funciones serán las recogidas en el artículo 14 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones —entre otras, la supervisión del cumplimiento de los planes adscritos, el control de la observancia de las normas de funcionamiento, el

nombramiento de expertos, la representación del fondo, la aprobación de la actuación de la entidad gestora en cada ejercicio económico o la integración en el fondo de nuevos planes de pensiones— y repercutirán los derivados del ejercicio de las funciones a los diferentes fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.

6. Finalmente, y por lo que se refiere al régimen financiero de estos fondos (arts. 60 y ss. LPFP), serán clasificados como de renta fija, de renta fija mixta o de renta variable.

En lo concerniente a sus inversiones, se regirán por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, lo que supone que el activo se ha de invertir con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación; con plazos adecuados a sus finalidades, y exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias, tomando en consideración el riesgo y el impacto social y medioambiental de las inversiones. Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos no podrán ser invertidos en empresas o negocios que cuenten con alguna sede en paraísos fiscales o que hayan cometido delitos medioambientales o laborales en los diez años anteriores a la inversión. El proceso de inversión, caracterizado por ser socialmente responsable, tendrá criterios comunes que valorarán los riesgos extrafinancieros y los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo alineados con los principios para la inversión responsable. De manera particular, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la taxonomía medioambiental y social contenida en el Reglamento 2020/852, de 18 de junio (*DOUE* de 22 de junio), relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.

GA _ P

Se trata de una experiencia, guiada por algunos referentes comparados, que pretende promover los planes y fondos de pensiones del sistema de empleo —los del sistema asociado tienden a desaparecer y los del sistema individual se mantienen con

un régimen propio— y que persigue garantizar un control y una rentabilidad en los fondos y en los planes de la previsión complementaria privada, especialmente de trabajadores, empleados públicos y autónomos.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.